

EL PAIS

Una seguridad privada a precio de saldo

Los guardianes de la protección en España tienen que lidiar con el intrusismo, márgenes ajustados y salarios muy moderados, en un sector que cada vez colabora más con la Administración

Madrid 23 JUN 2017 - 16:25 CEST

https://economia.elpais.com/economia/2017/06/22/actualidad/1498149115_576016.html



Seguridad privada en los alrededores del Santiago Bernabéu con motivo de partido Real Madrid - Bayer Munich. VÍCTOR SAINZ

[Miguel Ángel Ramírez, presidente de la empresa Seguridad Integral Canaria,](#) está considerado el rey del low cost en su sector. Y no por méritos corporativos. Presenta ofertas imbatibles a concursos públicos gracias a que somete a su plantilla, según un informe de la Agencia Tributaria, a “condiciones leoninas”, obligando a los empleados a renunciar a los festivos o duplicando jornadas de trabajo. Sus compañeros de profesión [llaman a](#)

[empresas como la suya “piratas”](#) que tiran los precios. Ese es, según los expertos, el talón de Aquiles de un sector considerado uno de los mayores empleadores del país: hay más vigilantes (78.200) que guardias civiles (74.958) o policías nacionales (65.254). La ciberseguridad y la formación son otras dos dimensiones de un negocio donde la protección se paga poco: según el convenio, un responsable de seguridad cobra 1.122 euros brutos mensuales (en esa cantidad se incluye el prorrateo de las pagas extra). Si el trabajador lleva armas añade un plus de unos 179 euros (en total, 1.301 euros brutos). Eso es el mejor de los casos, porque muchas empresas tienen sus propios acuerdos y normalmente retribuyen menos.

[“Se firma cualquier barbaridad.”](#) Algunas empresas colocan de representantes de los trabajadores a personas a dedo, socios o familiares. El problema es que desde la Administración se adjudican a estas empresas concursos porque solo se valora el precio. Y si dijéramos que el salario del convenio sectorial es altísimo..., pero no es el caso”, analiza Daniel Barragán, secretario de acción sindical de la federación de Servicios de CC OO. A Rafael Saldaña, del Sindicato Libre de Seguridad, le choca comprobar que en un sector tan controlado, donde el factor humano determina el coste final, haya unas empresas “que licitan a unas cantidades que cubren los costes salariales y además obtienen beneficios, mientras otras necesitan descolgarse del convenio colectivo para subrogar a los mismos trabajadores que ya estaban prestando el servicio en organismos oficiales, siendo estas últimas las que se quedan con el pastel”.

Este y otros motivos han hecho que la facturación del sector se haya visto muy mermada en los últimos años. [Las 1.534 empresas registradas en el Ministerio del Interior](#) ingresan en España menos que hace una década: fueron 3.481 millones en 2015. Entre 2009 y 2014 las caídas del negocio llegaron a un ritmo del 8% anual. Gracias al aumento de la demanda de alarmas e instalación de equipos, en 2016 las cosas comenzaron a ir moderadamente bien, con crecimientos del 2,7%, hasta los 3.580 millones, algo que, sin embargo, no compensa lo perdido en años anteriores.

[En el resto del mundo la seguridad](#), desde la vigilancia a la instalación de alarmas, el transporte de explosivos, el traslado de fondos o la protección personal, es un mercado con buenas perspectivas. Según un estudio de la firma de análisis Freedonia, los servicios de seguridad privada mueven 161.000 millones de dólares en el mundo, y se estima que crecerán a un ritmo medio anual del 6% hasta 2020. La mitad de la población mundial vive en países donde hay más empleados privados de seguridad que oficiales de policía, según un análisis de The Guardian. “En el sentido más amplio, el interés por los servicios de seguridad está impulsado por el riesgo de la delincuencia. A pesar de que las tasas de criminalidad caen en un gran número de países, existe una percepción generalizada de que la delincuencia va en aumento”, valora el informe de Freedonia. En España no es exactamente así: la tasa de criminalidad, según el balance que hace el departamento de Seguridad Nacional, no ha dejado de caer en los últimos años, “pero también lo hace la percepción social de inseguridad”, añaden desde el Ministerio del Interior. [En las encuestas del CIS de mayo de 2010](#) la inseguridad preocupaba a un 9,7% de los ciudadanos, mientras que el pasado diciembre tan solo era de un 3,2%.

Contratos por los suelos

La Administración genera contratos por importe de 600 millones por la custodia y vigilancia de sus infraestructuras y edificios. “Pero los sueldos son paupérrimos. Para los vigilantes y para todos los que trabajamos en seguridad”, lamenta el presidente de la asociación de profesionales de jefes de seguridad, Antonio Cedenilla. “Hay una competencia brutal de las empresas pirata para conseguir servicios. Lo único que quieren es gran volumen. Los beneficios han sido muy exigüos. Han cerrado empresas, pero creo que hemos tocado fondo y ahora reemprenderemos el vuelo”, repasa Cedenilla. “No estamos en una situación trágica de otros momentos, pero todavía nos queda un tiempo para la recuperación”, añaden en Aproser. “La culpa de esta situación la tienen las propias empresas con sus estrategias. No creemos que estén perdiendo dinero, no son hermanas de la caridad”, contrapone Barragán (CC OO). El “descuelgue” del convenio sectorial es la

práctica más criticada. Para UGT, modificar la reforma laboral es clave para “recuperar su prevalencia ante los acuerdos de empresa”.

Alejandro Fernández, consejero delegado [de Ilunion Facility Services](#), calcula que alrededor del 70% de los contratos con la Administración están en manos de empresas que no se adhieren al convenio del sector. “Más del 90% de los costes de una oferta suelen ser por la mano de obra. Si una propuesta está un 30% o un 40% por debajo de la nuestra, es obvio que no se trata de un tema de ahorro por una mejor o peor gestión. Ahí entran salarios de 700 euros. Eso daña el servicio y va expulsando a otros operadores, como nosotros, porque tenemos claro que no vamos a precarizar el sector”. La empresa que dirige tiene 5.000 trabajadores, medio millar con algún tipo de discapacidad. “Estamos tratando de aplicar criterios de gestión muy estrictos, estudiamos muy bien en qué operaciones entramos. Lo hemos pasado un poco mal estos años, pero no hemos sido la excepción”. Cree que han pasado una época de “huida hacia adelante”, donde las empresas se han tenido que proteger para cubrir los costes de estructura. “Tocará una nueva situación que permita una subida de precios”, augura. ¿Cómo? “La forma de salir de aquí es capacitando a nuestra gente, ofreciendo algo mejor, especializándonos”.

EL PELIGRO ESTÁ EN LA RED

Según el Ministerio del Interior, el año pasado se registraron 234.174 casos de hurto, casi los mismos que el año anterior. La gran distribución y el comercio minorista son las empresas que más invierten en antenas conectadas con etiquetas adhesivas o duras que se encuentran en la ropa y otros productos. También se instalan cajas de policarbonato o las llamadas “arañas”, alarmas que “abrazan” productos que suelen ser muy caros. Antes las empresas se limitaban a suministrar la alarma. “Ahora se ofrecen sistemas donde todo se conecta. A través de un software ves lo que sucede en la tienda. Ofrecemos sensores y soluciones basadas en la identificación por radiofrecuencia. Cada artículo tiene un identificador como si fuera un DNI. Si sale de la tienda sabemos qué artículo es de forma remota”, detalla David Pérez del Pino, director de Checkpoint Systems en España y Portugal,

“España es el país que más invierte en sistemas para la prevención de hurtos. También es uno de los más afectados por esta práctica”.

Es un ejemplo de cómo el futuro del sector es convergente: la seguridad física y la lógica van camino de integrarse. Es una tendencia imparable, juzga Gianluca D’Antonio, director académico del Master in Cybersecurity del IE y presidente de ISMS Fórum Spain. “Las grandes multinacionales de defensa, tanto en Estados Unidos como en Europa, están desarrollando el mercado de ciberseguridad. El negocio tradicional va a cambiar. Dentro de cinco años la sociedad será básicamente digital, domotizada, sensorizada... esto se tiene que tomar en serio. Vamos muy por detrás de los malos”. Se calcula que el cibercrimen mueve 280.000 millones de dólares, el equivalente al PIB de Irlanda. “Se va a convertir en una prioridad para muchas empresas, porque pueden darse ataques a personas o a equipamientos”. S21 SEC, Necsia, Counter Craft son algunas empresas medianas, de entre 100 y 200 empleados, que desarrollan sus propios productos en competencia con gigantes del sector como Indra o Telefónica. Desde la Asociación Española de Empresas de Seguridad (AES) lo ven como un camino que no tiene marcha atrás. “Es verdad que en la realidad muy pocas empresas se conjugan la seguridad física y lógica, pero los análisis de riesgos van siendo comunes, aunque el camino es lento”.

Prosegur, el líder del mercado, factura cerca de 4.000 millones en el mundo y está fuertemente internacionalizado: en España su plantilla alcanza los 27.000 empleados sobre un total de 160.000. “Tenemos un crecimiento consistente en ventas y rentabilidad. Nuestra estrategia para crear valor ha empezado a dar resultados”, señaló Antonio Rubio, el director financiero, durante la presentación del último balance a los analistas. Es una de las más dinámicas en la apuesta por la convergencia entre seguridad física y lógica. “El sector se está adaptando. El mercado de la ciberseguridad crece a un ritmo del 25% anual. Prosegur tiene un potente departamento”, valora Iván Rubio, director de la revista Cuadernos de Seguridad.

Nichos de mercado

Eulen, otro gran actor, también ha girado el enfoque de su negocio. “Llevamos impulsándolo desde 2008. Las empresas tienen la necesidad de asegurar todos sus activos, tanto tangibles como intangibles, eso nos ha

llevado a integrar servicios de vigilancia con sistemas de seguridad (física y electrónica), inteligencia, ciberseguridad y ciberinteligencia”, explica Luciano Valladares, director de Eulen Seguridad. Este año esperan alcanzar los 207 millones en facturación. Lo que sí han notado, apunta Valladares, es que el principal servicio que disminuye es “la vigilancia convencional”, frente a la creciente demanda de acciones en infraestructuras críticas. En Securitas Direct, por ejemplo, combinan la innovación entre sus centros de Malmö (Suecia, país sede de la empresa) y Madrid. “En ellos trabajan más de 350 ingenieros en un gran abanico de especialidades”, analiza Cristina Rivas, directora de tecnología. Desde Internet de las cosas hasta procesado de imágenes, reconocimiento de voz, diseño de interfaces de usuario o big data. “Habitualmente trabajamos de forma simultánea en cinco o seis innovaciones”.

Más allá de estos grupos, sin embargo, fuentes empresariales reconocen que la seguridad privada en España no es un sector lo suficientemente atractivo para captar capital de otros países, ni tampoco brilla por su gran músculo exportador o por su desarrollo tecnológico. “Estamos poco concienciados, y lo vemos en la poca atención que dedicamos a los primeros auxilios o a la protección contra incendios. Estamos en un nivel de alerta antiterrorista 4 [considerado alto] y tenemos a los vigilantes presando el servicio con una defensa de goma, lamenta José Ignacio Olmos, de la Asociación de Diplomados Españoles en Seguridad y Defensa. “La seguridad siempre se ve como un gasto, y en cambio puede ser una ventaja competitiva”.

Una ventana de oportunidad se abre en el corto plazo para que el sector crezca: la Ley de Seguridad Privada, del año 2014, contiene un artículo (el 41.3) que autoriza a que las empresas privadas participen “en la prestación de servicios encomendados a la seguridad pública, complementando la acción policial”. Se ha especulado —y polemizado mucho— sobre si es lícito que un vigilante pueda llegar a actuar en una manifestación, o haga identificaciones en una zona pública, por ejemplo. “Antes no estábamos acostumbrados a que los vigilantes realizasen funciones de escoltas (como en el País Vasco), que estuviesen en aeropuertos, desempeñasen servicios en aguas internacionales o vigilasen determinados espectáculos, y ahora es normal. La ley, por su técnica legislativa, y por una flexibilización del concepto de la vía pública, ha abierto la puerta al desarrollo de nuevos servicios que puedan desempeñar las empresas en el futuro”, recuerdan en

Aproser. “Si tiene sentido la vigilancia de un centro comercial, ¿por qué no lo tiene en una zona comercial delimitada de una ciudad?”, se preguntan. “Cada caso tendrá que analizarse y el papel que tengamos que desempeñar lo irán definiendo las necesidades”.

El reglamento que desarrolla la ley, sin embargo, no se ha aprobado — continúa vigente el del año 1992—, y con el actual mapa político no se anticipan cambios muy drásticos. “Sin saber su contenido es difícil valorar cómo nos va a afectar”, piensa el responsable de CC OO. “El tema más delicado está en servicios de seguridad pública. Se baraja que puedan ejercerse funciones complementarias, como en otros países de nuestro entorno donde eso está más avanzado, incluso con patrullas externas controladas por la policía ejerciendo sus funciones en la calle. Pueden llegar a detener o participar en funciones policiales”. La línea roja, para Barragán, es “que no se use a los trabajadores como arma arrojadiza. No se les puede poner en situación de indefensión. Policías y vigilantes no tienen el mismo oficio”. El ejecutivo de Ilunion pronostica que habrá un nuevo desarrollo dentro del sector de prisiones, los eventos y las infraestructuras críticas (las que se consideran estratégicas para que funcionen los servicios esenciales del país).

Poca formación

¿Está capacitado el sector para afrontar un mayor papel cuando el 45% de los vigilantes solo ha completado la enseñanza obligatoria y solo el 8% son licenciados o diplomados? “Muchos profesionales no se están formando sobre las nuevas vías de negocio que se abren”, juzga Iván Rubio. Por ejemplo, sólo las personas acreditadas del sector pueden operar un dron para funciones de seguridad privada. “La ley establece las horas obligatorias de formación, pero se debería mejorar el reciclaje de los profesionales”. Es más, añade Gianluca D’Antonio, director académico del máster en Ciberseguridad del IE, “las nuevas tecnologías van más rápido, el mercado de la seguridad avanza hacia otro perfil de empleo y el sector tiene que reflexionar sobre la gestión de los recursos humanos”.

Yendo más lejos, hay quien incluso apunta a que la colaboración público-privada crezca como brazo de los servicios de seguridad ciudadana. “Los responsables de banca ya colaboran con las autoridades en temas de

ciberseguridad. Hay otros campos, como la amenaza yihadista, donde se está trabajando”, añade Rubio.

UNA PROFESIÓN DURA Y POCO RECONOCIDA

La Policía Local de Fuenlabrada (Madrid) denunció el mes pasado a la empresa de seguridad de un centro comercial de la ciudad porque sus vigilantes acosaban, supuestamente, a clientes homosexuales, gitanos, subsaharianos y magrebíes. Previamente, dos jóvenes de 18 y 20 años habían sido expulsados de la zona por besarse mientras paseaban. “La percepción de los compañeros que se dedican a la vigilancia no es la mejor”, recuerdan en CCOO. Una encuesta de la patronal realizada entre un millar de personas muestra que el 62% valora positivamente las funciones de los vigilantes y que el 57% no los sustituiría por personal público. La mayoría reconocen que se trata de una profesión dura y menos de la mitad identifica a los profesionales con una figura de autoridad. El 73% cree que la profesión no tiene el reconocimiento social y solo el 24% indica que la sensación de seguridad es la cualidad más valorada. Los ciudadanos, según el sondeo, no apuestan porque la presencia de los vigilantes se amplíe a zonas públicas: solo el 11% demanda seguridad privada en las calles, el 8% en colegios y universidades y el 8% en jardines y parques.